



ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA

**JUZGADO DE LO PENAL Nº 2**

Calle Alta nº18  
Santander  
Teléfono: 942248102  
Fax.:  
Modelo: TX004

Sección: Sin Sección

Proc.: **PROCEDIMIENTO  
ABREVIADO**

Nº: **0000210/2016**  
NIG: 3907543220160000668  
Resolución: Sentencia 000251/2016

Procedimiento Abreviado 0000111/2016 - 00  
JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 1 de Santander

| Intervención:       | Interviniente: | Procurador:                       | Abogado:                    |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Acusador particular |                | DIEGO FRANCISCO<br>DIEGO LAVID    | VANESA FERNANDEZ<br>VILA    |
| Acusado             |                | MARIA DEL MAR<br>MACÍAS DE BARRIO | JOSÉ MARÍA CAVADA<br>ALONSO |

**SENTENCIA Nº 000251/2016**

**EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY**

**CAUSA 210/2016**

**S E N T E N C I A**

En Santander a nueve de septiembre de dos mil dieciséis.

**VISTOS** por el Ilmo. Sr. D. **JOSÉ HOYA COROMINA**, Magistrado-Juez Titular del **JUZGADO de lo PENAL número 2** de esta ciudad, en primera Instancia las diligencias de **PROCEDIMIENTO ABREVIADO** número 111/2016 Instruidas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander por presunto delito de **ACOSO**, cuyo enjuiciamiento correspondió a este Juzgado y tramitado con el número de **Causa 210/2016**, seguida contra \_\_\_\_\_, mayor de edad, nacido el 12 de septiembre de 1985, natural de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ (Cantabria) hijo de \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_, sin antecedentes penales, con instrucción y cuya solvencia no consta acreditada en la causa, en libertad por esta causa, representado por la Procuradora D<sup>a</sup> María del Carmen **MACÍAS DEL BARRIO** y defendido por el Letrado D. José María **CAVADA ALONSO**, interviniendo en calidad de Acusación Particular

\_\_\_\_\_, representada por el Procurador D. Diego Francisco **DIEGO LAVID** y defendida por la Letrada D<sup>a</sup> Vanesa **FERNÁNDEZ VILA**, en cuyo procedimiento ha sido acusadora Ministerio Fiscal, representado por el Ilmo. Sr. D. Jesús **ALAÑA PÉREZ DE MENDIGUREN**, ha dictado la presente resolución fundada en los siguientes:



## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** Por el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander se incoaron Diligencias Previas contra el acusado ya reseñado por un presunto delito de Acoso, en cuyo procedimiento y con fecha 12 de febrero de 2016, se acordó la continuación del mismo por los trámites del procedimiento abreviado, habiéndose dictado Auto de Conclusión de las actuaciones con fecha 10 de junio de 2016.

**SEGUNDO.-** Elevadas las actuaciones a este Juzgado de lo Penal órgano competente para su enjuiciamiento, en el que tuvieron entrada con fecha 11 de julio de 2016, con igual fecha se acordó para la celebración del correspondiente juicio el día 9 de septiembre de 2016, admitiéndose la prueba que se declaró pertinente para su práctica en el plenario.

**TERCERO.-** Que con fecha 10 de marzo de 2016 por el Ministerio Fiscal se presentó escrito de acusación en el que se consignaban las siguientes conclusiones provisionales:

**Primera.-** El acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales, es compañero de trabajo de [redacted] en el Hospital Valdecilla. Como quiera que a raíz de unos problemas laborales del acusado, [redacted] se interesara como compañera por los mismos, el acusado confundió sus sentimientos y se declaró enamorado de [redacted], lo que ésta rechazó, aunque dejó la puerta abierta a ser amigos.

A partir del mes de Agosto de 2015 el acusado ha sometido a [redacted] a un claro seguimiento de su persona con continuas vigilancias tanto a su domicilio en [redacted] como posteriormente en el de [redacted], dejándole regalos que [redacted] no aceptaba bien en el coche, bien en el portal de su domicilio, y enviado numerosos mensajes de texto wasap que [redacted] no contestaba y si lo hacía era para pedir que la dejara en paz y no la mandara más mensajes. Este continuo seguimiento le ha producido a [redacted] una notable inquietud, que le impulsó no solo a denunciar estos hechos el 21 de Enero de 2016 sino a solicitar en el Juzgado una Orden de Protección que fue concedida en Auto de 2 de febrero de 2016 que impide al acusado acercarse a menos de 200 metros de [redacted] así como a comunicarse con ella.

**Segunda.-** Los hechos son constitutivos de un delito de acoso art. 172 ter 1ª y 2ª del C.P.



**Tercera.-** Es autor el acusado.-

**Cuarta.-** No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

**Quinta.-** Procede imponer al acusado la pena de ocho meses de multa a razón de seis euros diarios de cuota, responsabilidad personal subsidiaria caso de impago, En aplicación del art. 57.1 y 48 del C.P. se solicita se imponga al acusado la prohibición de acercarse a menos de 200 mts del domicilio de los padres de [redacted] y el suyo propio así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier vía por plazo de cinco años. Asimismo satisfará las costas procesales de acuerdo al dictado del artículo 123 del CP.

**Sexta.-** En concepto de responsabilidad civil, el acusado indemnizará a [redacted] en 2.000 euros por darle moral, con aplicación del artículo 576 de la LEC,

**CUARTO.-** Que por la representación de la Acusación Particular con fecha 2 de febrero de 2016 se presentó escrito de conclusiones del siguiente tenor:

**Primera.-** Que Don [redacted] ha sometido a Doña [redacted] a una vigilancia y seguimiento tanto de su persona como de su domicilio y domicilio de sus padres tanto en [redacted] como en [redacted].

A pesar de vivir en [redacted] Doña [redacted] se le ha encontrado en numerosas ocasiones merodeando por su domicilio y el de sus padres, a pesar de haberle pedido que no lo haga y la ha dejado varios regalos en la puerta de casa y en su coche a pesar de habérsele indicado igualmente que no lo haga.

Además de lo anterior han sido constantes los mensajes de WhatsApp a los que Doña [redacted] únicamente ha contestado para pedir que la deje en paz.

El control ha llegado hasta tal punto que Don [redacted] reconoció a Doña [redacted] que incluso en un descuido de esta le había cogido el teléfono móvil y se había descargado todas sus conversaciones por lo que conocía muchos datos de su vida privada.

Todo lo anterior ha producido en Doña [redacted] un gran malestar y temor de que Don [redacted] pueda hacerla algo por lo que ha llegado incluso a instalar una mirilla que graba cuando detecta movimiento teniendo incluso una grabación de Don [redacted] dejándola un regalo en la puerta de su casa y marcharse apresuradamente.

Dado que son compañeros de trabajo ha tenido que informar a sus



superiores de la situación.

El temor producido por todo lo anterior, unido a que coincide esta situación en el tiempo con haber tenido que reparar su vehículo en numerosas ocasiones por aparecer agua en el depósito, los focos rayados y dibujos obscenos en el mismo, habiendo denunciado esto igualmente, ha llevado a Doña [redacted] a denunciar los hechos y solicitar una Orden de Protección que fue concedida en Auto de 2 de febrero de 2016.

**Segunda.-** Los hechos realizados son constitutivos de un delito de acoso del artículo 172 ter 1.1º y 2º del Código Penal.

**Tercera.-** De tales hechos responde, según el artículo 28 del Código Penal, el acusado en concepto de autor.

**Cuarta.-** No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

**Quinta.-** Por tales hechos procede imponer al acusado, además de las costas de acuerdo con el art. 123 CP., la pena de ocho meses de multa a razón de seis euros diarios de cuota, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

SE solicita además de acuerdo con el art. 57.1 y 48 CP. la pena accesoria de prohibición de aproximación a una distancia inferior a 200 metros a la persona de [redacted], su domicilio y el domicilio de sus padres así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier vía por plazo de cinco años.

**Sexta.-** En concepto de responsabilidad civil, el acusado indemnizará a Doña [redacted] con 2.000 euros por daño moral, con aplicación del artículo 576 LEC.

**QUINTO.-** Que Por la defensa en idéntico trámite se presentó con fecha 26 de mayo de 2016 escrito de defensa en oposición a los de acusación con el siguiente contenido:

**Primero.-** [redacted] y [redacted] efectivamente son compañeros de trabajo, y precisamente a raíz de una situación de incertidumbre laboral, que afectaba a ambos junto al resto de compañeros de trabajo, entre ellos surgió una amistad fuera del entorno laboral.

Esta relación de amistad (nunca existió relación sentimental, teniendo en cuenta que [redacted] ya mantenía una relación sentimental con otra persona) y en un ambiente de recíproco entendimiento, se han contado sus problemas personales y han compartido intimidades, han compartido viajes o salidas



fuera de Santander. En el marco de esta relación personal, efectivamente le ha hecho regalos a [redacted], como muestra de afecto.

En el marco de esta relación de amistad, una forma habitual de comunicación entre ambos ha sido a través de mensajes de WhatsApp y de hecho durante todo este tiempo dicha comunicación ha dado lugar a una importante cantidad de mensajes entre ambos.

En concreto en una conversación mantenida el 9 de agosto de 2015, así como una anterior de 5 de julio de 2015)

Se niega categóricamente que [redacted] cogiera el teléfono móvil de [redacted] y que se descargara todas sus conversaciones, mientras que los datos de la vida privada de esta solo los ha conocido porque ella se los ha contado o por terceras personas. En un momento dado [redacted] se enteró que [redacted] estaba contando que tenía un serio problema de salud, a sabiendas de que no era cierto, y [redacted], que no entendía el porqué de esta conducta, se lo recriminó a [redacted]. A raíz de esta discusión entre ambos, es cierto que la relación se deteriora, si bien [redacted] no llegó a pensar que resultaría terminante la decisión de [redacted] de zanjar absolutamente el contacto entre ambos, lo cual sucedió el 3 de enero de 2016, en la que cesa toda comunicación entre ambos sin perjuicio de algún contacto por motivos estrictamente laborales.

Sin embargo, el 21 de enero de 2016 [redacted] denuncia a [redacted] alegando sentirse acosada por [redacted].

En ningún momento [redacted] ha atentado contra la integridad física, psíquica o moral de [redacted], ni contra sus bienes, no teniendo nada que ver con los daños sufridos en su coche, que viene sufriendo la denunciante desde antes de que la relación con [redacted] comenzara a deteriorarse.

Del mismo modo, la conducta de [redacted] en ningún caso ha alterado ni su vida cotidiana ni laboral de [redacted], quien efectivamente ya tenía problemas con otra persona, como puso de manifiesto en agosto de 2015.

En ningún momento [redacted] ha realizado seguimiento alguno en la persona de [redacted], ni cuando esta vivía en [redacted] ni cuando decide trasladarse a S. [redacted].

En realidad, [redacted] le prometió regalar a [redacted] unas fotos de su pueblo. [redacted] es fotógrafo, actividad a la que se dedica de forma casi profesional, de hecho además de tener una página web dedicada a la fotografía ([www.fotografiasdecastilla.es](http://www.fotografiasdecastilla.es)) ha cubierto como reportero gráfico eventos deportivos (esencialmente de ciclismo) y ha publicado sus trabajos en la prensa regional. El motivo de acudir a [redacted] (población conocida por [redacted] antes de conocer a [redacted]) no era otro que conseguir una fotografía para regalársela. En ningún de estos viajes a [redacted] fue intención



de [redacted] controlar o vigilar a [redacted], puesto que de hecho, cuando se trasladaba a [redacted] desconocía si ella estaba en el pueblo, o donde pudiera estar.

Del mismo modo, cuando [redacted] decide irse a vivir a [redacted] no ha existido intención alguna de crear en la denunciante una sensación de intranquilidad, en todo caso, tal sensación venía provocada por los problemas que ya tenía con aquel antiguo novio o pareja a la que se refería en sus conversaciones en julio y agosto del 2015.

**Segunda.-** No conforme con la calificación.

**Tercera.-** No conforme con la autoría.

**Cuarta.-** No conforme

**Quinta.-** No conforme con la pena propuesta.

**Sexta.-** No procede indemnización alguna.

**SEXTO.-** Por Auto de fecha 11 de julio de 2016 se acordó para la celebración del correspondiente juicio el día 9 de septiembre de 2016, admitiéndose la prueba que se declaro pertinente para su practica en el plenario.

**SÉPTIMO.-** Que al acto del juicio comparecieron las partes y testigos citados propuestos por la acusación y la defensa así como los peritos cuya declaración fue interesada en el escrito de conclusiones provisionales, elevándose por las partes las conclusiones a definitivas.

**OCTAVO.-** Que en la tramitación de la presente causa se han observado las prescripciones legales.

## **HECHOS PROBADOS.**

### **RESULTANDO PROBADO Y ASÍ SE DECLARA:**

**Primero.-** Que el acusado [redacted], mayor de edad y sin antecedentes penales, es compañero de trabajo de [redacted]



en el Hospital Valdecilla.

**Segundo.-** Como Consecuencia de problemas laborales acaecidos años atrás en el que se vieron implicados ambos surgió una amistad entre ambos, amistad que en todo momento mantuvo dentro del marco de la relación entre amigos, mientras que el acusado pretendió derivarla hacia el ámbito sentimental lo que fue rechazado categóricamente por esta, aunque dejó la puerta abierta a ser amigos.

**Tercero.-** Ante la negativa de a establecer una relación sentimental y en concreto a partir del mes de Agosto de 2015 el acusado ha sometido a a un persistente seguimiento de su persona con continuas vigilancias tanto a su domicilio en como posteriormente en el de , dejándole notas, y regalos que no aceptaba bien en el coche, bien en el portal de su domicilio, y enviado numerosos mensajes de texto wasap que no contestaba y si lo hacía era para pedir que la dejara en paz y no la mandara más mensajes.

**Cuarto.-** Este continuo seguimiento motivo primeramente que cambiara su domicilio de a , provocándola además una notable inquietud, que le impulsó no solo a denunciar estos hechos el 21 de Enero de 2016 sino a solicitar en el Juzgado una Orden de Protección que fue concedida en Auto de 2 de febrero de 2016 que impide al acusado acercarse a menos de 200 metros de así como a comunicarse con ella.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** Que por la defensa del acusado se sostienen dos líneas diferenciadas en la defensa articulada; por una parte la ausencia de prueba materializadas en el plenario que permitan concluir en la condena demandada por el Ministerio Fiscal y la Acusación particular y por otra parte, esta dividida en dos vertientes la ausencia de elementos que permita la conformación del tipo en el delito de Acoso y la del consentimiento en la relación por la presunta perjudicada y en el hecho de que ante la ruptura manifestada por que el acusado reconoce, la intención del acusado era tener una conversación para exigir o cuando menos obtener explicaciones de la ruptura y la posibilidad de recuperar la relación.

**SEGUNDO.-** Que con relación a la ausencia de prueba válida practicada en el plenario que permita desvirtuar la presunción de inocencia



que ampara al acusado, expresamente alegada por su defensa, debe a estos efectos significarse que de las pruebas practicadas en el plenario tres son las en las que la acusación pública fundamenta la pretensión de condena, por una aparte la declaración de la ofendida, en segundo término la prueba documental aportada al procedimiento, y en último lugar la testifical practicada del testigo aportado por la defensa a la causa, todo ello adicionado con la declaración voluntariamente prestada por el acusado en el plenario.

Para determinar la veracidad de los hechos denunciados, habrá de analizarse la conducta del denunciada partiendo del derecho a la presunción de inocencia, que al efecto le otorga el artículo 24.2 Constitución Española, y cuya quiebra denuncia su representación, debiéndose para la adecuada solución de la cuestión suscitada diferenciarse entre la ausencia de prueba, y la valoración que de las pruebas practicadas en el plenario pueda llevar a término este Juzgador, pues debe partirse para la adecuada solución de la cuestión planteada de recordar que el contenido del derecho fundamental invocado, conforme enseña la **STC 157/1995, de 6 noviembre (RTC 1995\157)**, se conforma en base a las siguientes exigencias: 1) la carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de la pretensión penal corresponde exclusivamente a la acusación, sin que sea exigible a la defensa una *probatio* diabólica de los hechos negativos; 2) Sólo puede entenderse como prueba la practicada en el juicio oral bajo la inmediación del órgano judicial decisorio y con observancia de los principios de contradicción y publicidad; 3) de dicha regla general sólo pueden exceptuarse los supuestos de prueba pre constituida y anticipada; y 4) la valoración conjunta de la prueba practicada es una potestad exclusiva del juzgador, que éste ejerce libremente con la sola obligación de razonar el resultado de dicha valoración.

**TERCERO.-** Trasladando la citada doctrina al caso enjuiciado en el presente supuesto es indudable que el Ministerio Fiscal ha propuesto y aportado a título de cargo la prueba consistente en la declaración de la denunciante, víctima de los hechos denunciados, la testifical del testigo presencial así como la documental que permite afirmar la realidad de la discusión previamente relatada por el denunciante, habiéndose producido dichas declaraciones bajo el imperio de los principios reflejados con anterioridad, siendo evidente que conforme se ha señalado para que pueda prosperar la alegación realizada por la parte será necesario que la *falta de prueba que se alega tiene que ser constatada en el proceso* pues existiendo *prueba practicada conforme a las previsiones procesales*, podrá entenderse desvirtuada la presunción de inocencia, conforme a la valoración que de la misma se lleve a término por el órgano judicial, pues es doctrina constante y reiterada que la presunción de inocencia opera sobre la ausencia de pruebas legítimamente obtenidas que permitan inferir la participación del individuo en el hecho criminal que se le imputa, no siendo trasladable los citados principios a la valoración que de las pruebas realizadas se lleve a término, pues siendo la referida valoración competencia exclusiva de la función





jurisdiccional que deben efectuar en exclusiva los juzgadores conforme señalan las (STS 12 febrero 1993 [RJ 1993\1057], 14 junio 1993 [RJ 1993\5000], 23 julio 1993 [RJ 1993\6429], 17 diciembre 1993 [RJ 1993\9568], 31 enero 1994 [RJ 1994\597], 1 febrero 1994 [RJ 1994\1243] y 23 abril 1994 [RJ 1994\3164]), esta deberá realizarse conforme a los principios de la libre apreciación valorativa como enseñan las (STS 22 junio 1993 [RJ 1993\5279], 8 julio 1993 [RJ 1993\5898], 18 septiembre 1993 [RJ 1993\6775], 10 noviembre 1993 [RJ 1993\8491], 18 febrero 1994 [RJ 1994\940], 6 mayo 1994 [RJ 1994\3620], 21 julio 1994 [RJ 1994\6704], 15 octubre 1994 [RJ 1994\7921], 7 noviembre 1994 [RJ 1994\8790] y 27 septiembre 1995 [RJ 1995\6749]).

**CUARTO.-** Que en la citada línea argumental la jurisprudencia del Tribunal Supremo reconduce la valoración de la prueba a una operación que se efectúa a través del razonamiento y en consecuencia regida por criterios de racionalidad, que expresamente exige además el artículo 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para las declaraciones testificales. Esta actividad evaluatoria se realiza sin embargo con la libertad de criterio que reconoce el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debiendo la sentencia reflejar la consideración crítica de las pruebas practicadas, así como el razonamiento lógico que conduce a la admisión y configuración de las conclusiones incorporadas al *factum* y en definitiva, a la admisión de culpabilidad y subsiguiente responsabilidad del acusado (STS 26 febrero y 14 marzo 1990 [RJ 1990\2972 y RJ 1990\2474]).

**QUINTO.-** Finalmente resultara conveniente señalar la doctrina constitucional sobre la posibilidad de que las declaraciones de la víctima (incluso como único testigo) puedan erigirse en prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. A este respecto habrán de destacarse las SSTC 62/1985, de 10 de mayo [RTC 1985\62]; 201/1989, de 30 de noviembre [RTC 1989\201]; 174/1990, de 12 de noviembre [RTC 1990\174]; 229/1991, de 28 de noviembre [RTC 1991\229]; 283/1993, de 27 de septiembre [RTC 1993\283]; 64/1994, de 28 de febrero [RTC 1994\64] que señalan que la declaración de la víctima, practicada normalmente en el acto del juicio oral con las necesarias garantías procesales, puede erigirse en prueba de cargo y que, en consecuencia, la convicción judicial sobre los hechos del caso puede basarse en ella, incluso cuando se trate del acusador SSTC 201/1989 [RTC 1989\201], F. 4, y 169/1990 [RTC 1990\169], F. 2, y AATC 937/1986, de 12 de noviembre [RTC 1986\937 AUTO]; 335/1987, de 18 de marzo [RTC 1987\335 AUTO]; 961/1987, de 22 de julio [RTC 1987\961 AUTO].

En idéntica línea se expresa la doctrina jurisprudencial de las que son de destacar entre otras muchas, las STS de 20 de octubre de 1999 (RJ 1999\8924), 9 de octubre de 1999 (RJ 1999\8916), 1 de octubre de 1999



(RJ 1999\7597), 22 de abril de 1999 (RJ 1999\4866) y 13 de febrero de 1999 (RJ 1999\502), se expresa que aunque en principio, la declaración de la víctima puede ser hábil para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, atendiendo a que el marco de clandestinidad en que se producen determinados delitos, significadamente contra la libertad, impide en ocasiones disponer de otras pruebas, ha de resaltarse que para fundamentar una sentencia condenatoria en dicha única prueba es necesario que el Tribunal valore expresamente la comprobación de la concurrencia de las siguientes notas o requisitos:

1- Ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acusador/acusado que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, u otro interés de cualquier índole que prive a la declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre.

2.- Verosimilitud, es decir, constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que avalen lo que constituye una declaración de parte, en cuanto que la víctima puede personarse como parte acusadora particular o perjudicada civilmente en el procedimiento (arts. 109 y 110 L.E. Criminal).

3- Persistencia en la incriminación; ésta debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones, (STS de 28 de septiembre de 1988 [RJ 1988\7070], 26 de mayo [RJ 1992\4487] y 5 de junio de 1992 [RJ 1992\4857], 8 de noviembre de 1994 [RJ 1994\8795], 27 de abril [RJ 1995\3381] y 11 de octubre de 1995 [RJ 1995\7852], 3 [RJ 1996\2866] y 15 de abril de 1996 [RJ 1996\3701], 14.09.00 [RJ 2000\7937]).

**SEXTO.-** Que trasladando la totalidad de la doctrina expuesta al supuesto objeto de enjuiciamiento, habrá de analizarse y valorarse la prueba aportada, y a este respecto, y a pesar de los esfuerzos argumentativos desarrollados por la defensa habrá de analizarse la practicada sometida al análisis de los principios de la sana crítica.

En primer término habrá de partirse de la propia declaración del encausado quien parte de reconocer los hechos básicos, desde la relación de amistad inicial, su pretensión de avanzar en esta convirtiéndola en una relación amorosa, que fue desestimada de forma radical por la presunta víctima, el reconocimiento de la materialización de regalos, notas y fotografías e incluso flores que dejaba unas veces en el vehículo de , otras a la puerta de su domicilio, la multitud de Wasaps remitidos, y la posición firme y contundente de esta de que cesara en tales conductas, que siempre materializaba a las espaldas de , y con el único objeto, este expresamente reconocido, de hacerla más feliz el día, lo que claramente



acredita la ausencia de aceptación de la voluntad de la víctima de no convertir la relación existente en la amorosa que el acusado pretendía, en una clara negación a asumir y aceptar la voluntad y la decisión expresada por la perjudicada.

En segundo término, se cuenta así mismo con la declaración de la víctima, efectuada en el plenario, clara y contundente, no solo de las razones que la llevaron a esta a la amistad con el acusado, que se fundaba en la devolución del apoyo prestado en su día ante las dificultades laborales sufridas, que pretendía compensar mediante la amistad ante las carencias personales que el acusado padecía y reconoció en su declaración inicial, consistentes en una acentuada timidez y dificultad de relación con otras personas que este puede que en un principio confundiera pero que luego consciente de la realidad que reconoció expresada por la víctima, pretendió revertir a la relación por el interesada con claro desprecio de la voluntad nítidamente expresada por la perjudicada.

En tercer lugar y de la declaración de la víctima, clara resulta la situación de acoso a la que esta se vio sometida, pues bien con fundamento en la timidez o con otra intención no confesada, la víctima se vio sometida a una invasión de su intimidad por medio de regalos desde flores, notas y fotografías que se encontraba en su vehículo a la salida de su trabajo, sin que ello se realizara de forma directa y personal, lo que claramente ponía de relieve una vigilancia del vehículo por parte del acusado, a dejar otros regalos a la puerta del domicilio de la perjudicada, nuevamente sin hacer acto presencia personal ni darlo de manera personal, lo que claramente ponía de relieve, no solo el conocimiento de su domicilio sino de la presencia del acusado en él. La visión del acusado por amigos de la víctima que lo observan en las inmediaciones hasta finalmente las retiraciones de mensajes por Wasaps que lógicamente alteran a la víctima como a cualquier persona al invadir el espacio de libertad personal, lo que como claramente esta expresó, provocó su marcha de [redacted] el traslado de su residencia a [redacted].

En cuarto lugar, y como colofón de todo lo expresado no puede dejarse de lado que ante la situación en que se encontraba la víctima y la constatación de que este no aceptaba la voluntad de ella, opta y resuelve por terminar la relación amistosa de forma radical, hecho que nuevamente no es aceptado por el acusado, como expresamente reconoció en el plenario, reconoció su defensa en el escrito de conclusiones y finalmente en su informe, y bajo el pretexto de obtener unas explicaciones, que vaya por delante no eran debidas, pretende nuevamente no respetando la voluntad de la víctima contactar con ella de manera reiterativa como ponen de relieve los Wasaps obrantes a los folios 1614 a 1631 lo que motiva que la víctima deba recurrir a la denuncia policial de estos hechos, lo que motiva la intervención policial y la adopción de medidas que ponen coto por fin a la situación de acoso y permiten alcanzar a la víctima la paz buscada.



**SÉPTIMO.-** Que llegados a este punto, claro es que los hechos sino en su totalidad si en su mayor parte son expresamente reconocidos, más frente a ello se alza su defensa en un doble vía impugnativa, por una parte sosteniendo que tal conducta no es constitutiva de infracción penal, pues si bien se reconoce la insistencia del acusado y la reiteración de contacto con la víctima lo encuadra en un presunto derecho de esta de obtener unas explicaciones de una ruptura que claramente le fue expresada por esta, y la que quería revertir o cuando menos exigir las explicaciones pertinentes, olvidando que una vez expresada la ruptura por la víctima expresada su voluntad que no quería saber nada más de él, que daba por terminada la amistad, y demandada por el acusado una explicación que le fue rotundamente negada, huelgan más demandas, peticiones, reiteraciones de explicación cuando se expresa con rotundidad y claridad el final definitivo de la amistad, frente a lo cual únicamente cabe aceptar la voluntad expresada dentro el marco de la libertad personal amparada por el ordenamiento jurídico desde el constitucional al penal, de ahí que la segunda de las posiciones defensivas sostenidas, la de la última ratio del derecho penal caiga por su peso cuando se invaden de una manera constante el marco de la libertad individual, pretendiendo forzar el cambio de las decisiones adoptadas, y en ultimo termino y frente a la alegación de la defensa de que no se puede penalizar al "pesado", como posteriormente se verá habremos de distinguir entre el pesado y el acosador, pues el pesado cesa en su posición y termina respetando la voluntad ajena en tanto que el acosador por medio de acciones sibilinas pretende alterar la voluntad de la víctima haciendo modificar sus decisiones por medio del acoso psicológico medio que utiliza para la obtención del fin pretendido.

**OCTAVO.-** Lo anterior se encadena por la defensa con la conformación del tipo penal y en concreto con la interpretación que hace de este, pretendiendo que para la materialización de la condena es necesario un plus además del acoso y lo concreta en la acreditación de las consecuencias de este.

La postura sostenida por la defensa no puede ser aceptada y ello por cuando hasta la promulgación de la LO 1/2015 de reforma del Código Penal el único tipo penal vigente era el de las Coacciones y se definían estas según el Diccionario de la Lengua Española, como la fuerza o violencia que se hace a una persona para obligarla a que diga o haga alguna cosa. La jurisprudencia, en referencia al delito de coacciones, ha declarado que la coacción implica una acción antijurídica de violencia (*sea vis física, vis compulsiva o vis in rebus*) para que el sujeto pasivo haga lo que no quiera hacer, y que el mismo lo haga o deje de hacer, como consecuencia de aquella violencia -vid. ad exemplum, las Sentencias de 23 de mayo de 1975 (RJ



1975\2290) y de 28 de abril de 1988 (RJ 1988\2898)-; estimando que, a este respecto, se consideran válidos los medios intimidatorios de orden moral, por cuanto lo importante es que se venza la voluntad del ofendido, sin que sea preciso que la fuerza o intimidación sea absoluta o irresistible, pues basta la relativa que produzca un notable constreñimiento -**vid. Sentencias de 7 de febrero de 1951 (RJ 1951\158) 15 de marzo de 1954 (RJ 1954\843) y 9 de diciembre de 1963 (RJ 1963\4924)-**; siendo preciso, para calibrar el alcance de la coacción o presión moral, valorar la cultura, educación y ambiente social de los sujetos activo y pasivo, y demás circunstancias concurrentes -**vid. Sentencias de 6 de febrero y de 6 de abril de 1968 (RJ 1968\789 y RJ 1968\1823)-**.

Que en consecuencia de lo expuesto debe afirmarse que la esencia de la coacción radica en la imposición de la voluntad del agente sobre otra persona, impidiéndole efectuar un acto lícito u obligándole a realizar algo que no quiera, instrumentado al efecto, como medio de oposición y vencimiento de la adversa voluntad, ejercicios o manifestaciones de violencia, ya cristalizados en actos de fuerza física o material, o de presión moral o intimidación, o, incluso, violencias desatadas sobre las cosas, *vis in rebus* equiparable a la personal, según constante parecer de la doctrina legal. Delito que incide sobre la libertad de determinación del individuo, atendiendo a sus propias motivaciones y esquemas intelectivos y éticos, formando y decidiendo libremente el sentido de su voluntad y actuando o ejecutando en concreto el contenido de la misma. Al aparecer constreñidos tales estadios psíquicos por la fuerza compresora de unos motivos extraños, la voluntad del sujeto pasivo se halla bloqueada y compelida, anulada en la facultad de autodeterminación, y doblegada y oprimida en sus expresiones o exteriorizaciones más espontáneas. El delito se ofrece, pues, como una patente y hosca agresión contra la libertad personal, como grave perjuicio a la autonomía privada de la voluntad. La libertad, en su dimensión jurídica, valor fundamental de la persona humana, traducida en poder o facultad de obrar, garantizada en los artículos 16 y 17 de la Constitución Española, se ve atacada en sus raíces más íntimas ante la consumación de unas coacciones; al resultar protegida, como bien capital y apreciable del ser humano, el derecho penal reconoce a la libertad el carácter de bien jurídico, cuya salvaguarda se logra, aparte de por la creación de otras figuras delictivas, prohibiendo y sancionando las acciones encaminadas a su lesión subsumibles en el tipo delictivo que nos ocupa. El laconismo de la definición del precepto penal ha exigido su definición y delimitación de sus límites por parte de la Jurisprudencia.

**NOVENO.-** La doctrina viene condensando los elementos configuradores del delito de coacciones en los siguientes: a) dinámica delictiva consistente en el despliegue de una conducta violenta, tanto material, *vis física*, como intimidatoria o moral, *vis compulsiva* dirigida contra los sujetos pasivos, bien de modo directo, o indirecto, a través de terceras personas o de la *vis in rebus*, y encaminada, como resultado, a



impedir hacer lo que la ley no prohíbe o a efectuar lo que no se quiera, sea justo o injusto; b) que tal conducta ofrezca una cierta intensidad en sus manifestaciones violentas, ya que, de no ser así, la figura de la falta aparecería como la más adecuada, no siendo necesario que la presión intimidatoria sea absoluta o irresistible, cabiendo la relativa y suficiente que origine el finalístico resultado perseguido para que la consumación del delito tenga lugar, aun cuando no se logren los objetivos totales, siendo un concepto valorativo en su determinación y alcance por el Juzgador penal, dadas las condiciones en que se realice, la cultura, educación y ambiente social sobre los sujetos intervinientes, lugar y tiempo de su comisión y demás circunstancias y antecedentes de influjo en los hechos; c) atendiendo al factor psicológico, ha de acusarse no solamente la conciencia y voluntad de la actividad desarrollada, sino el ánimo tendencial de querer restringir la libertad ajena, como bien jurídico protegido por el ordenamiento, cual se deriva del significado de los verbos impedir y compeler, utilizados al configurar el tipo delictivo; d) ilicitud de la actuación del agente al no estar legítimamente autorizado para la efectucción de los actos señalados como coactivos, lo que conlleva el examen del proceder del autor confrontándolo con las reglas generales del ordenamiento jurídico y con la normativa reguladora del ejercicio de las actividades concretas de las personas. Pudiendo citarse como portadores de anterior doctrina, entre otras, las Sentencias de 2 febrero 1981 (RJ 1981\474), 25 mayo, 4 octubre y 7 diciembre 1982 (RJ 1982\2714, RJ 1982\5588 y RJ 1982\7386), 25 marzo y 10 mayo 1985 (RJ 1985\2031 y RJ 1985\2469), 6 junio 1986 (RJ 1986\3110) y 26 febrero 1992 (RJ 1992\1476).

**DECIMO.-** A la vista de lo expuesto, claro es que la conducta desarrollada por el acusado no puede ser incardinada en el tipo de las coacciones al no reunir los requisitos exigidos por el tipo, pues no existe una conducta intimidatoria de carácter físico o verbal de contenido amenazante por lo que la citada conducta previamente a la citada reforma del Código Penal había que afirmar era impune, mas con la citada reforma accede al ordenamiento penal la figura del acoso del origen anglosajón el denominado *Stalking* con el fin de sancionar y penar las conductas coaccionantes no de origen físico sino psicológico como claramente expresa el preámbulo de la citada ley en el que puede leerse literalmente lo siguiente:

*XXIX.- También dentro de los delitos contra la libertad, se introduce un nuevo tipo penal de acoso que está destinado a ofrecer respuesta a conductas de indudable gravedad que, en muchas ocasiones, no podían ser calificadas como coacciones o amenazas. Se trata de todos aquellos supuestos en los que, sin llegar a producirse necesariamente el anuncio explícito o no de la intención de causar algún mal (amenazas) o el empleo directo de violencia para coartar la libertad de la víctima (coacciones), se producen conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, a la que se somete a persecuciones o vigilancias constantes, llamadas reiteradas, u*



*otros actos continuos de hostigamiento.*

Claro resulta de las propias palabras del legislador que con la reforma se da entrada en nuestro ordenamiento jurídico al ya señalado *Stalking*, voz anglosajona que significa acecho y que describe un cuadro psicológico conocido como *síndrome del acoso apremiante*. El afectado, que puede ser hombre o mujer, *persigue de forma obsesiva a la víctima*: la espía, la sigue por la calle, la llama por teléfono constantemente, la envía regalos, la manda cartas y SMS, escribe su nombre en lugares públicos. En EE UU, el *stalking* está presente en los medios de comunicación, porque se hacen eco de los procesos y sentencias por este tipo de hostigamiento.

El acoso físico es definido como una forma de acoso que consiste en la persecución ininterrumpida e intrusiva a un sujeto con el que se pretende iniciar o restablecer un contacto personal contra su voluntad. El término se usa en el ámbito de la sociología, psicología, el derecho y las Ciencias naturales.

En psicología se utiliza el término acoso para referirse a un trastorno que sufren algunas personas y que las lleva a espiar a su víctima, seguirla por la calle, llamarla por teléfono, mandarle cartas, mensajes SMS, regalos, escribiendo su nombre en muros de zonas muy visibles o incluso amenazarla y cometer actos violentos contra ella.

Finalmente y con respecto al nuevo tipo penal del acoso importa traer a colación lo afirmado en el dictamen de la Comisión del Congreso con respecto a la nueva figura en el dictamen de la citada Comisión puede leerse que:

*Con frecuencia oigo a víctimas/supervivientes de violencia intragénero (también de violencia de género) hablar del "aliento en la nuca" que aún sienten. Con esto se refieren a la presencia de quien las maltrata de una forma indirecta y a cómo esta presencia aún las intimida y condiciona sus vidas.*

*Esta forma de estar presente sin estarlo, de coaccionar sin coaccionar, se denomina en el ámbito anglosajón *stalking* y, de momento, no está regulada en nuestro ordenamiento jurídico. Consiste en:*

*– todos aquellos contactos que puede establecer quien maltrata con la víctima: mensajes, cartas, etc.*

*– todas aquellas conductas de seguimiento y vigilancia.*

*– usar a terceras personas para obtener y/o enviar información, mensajes, etc.*



– ocupar espacios en los que sabe que se encontrará la víctima, a propiciar situaciones en las que coincida con ella, a usar redes sociales, etc. para enviar mensajes sutiles y cifrados que sólo entiende la víctima y que le hacen ver que quien la maltrataba aún sigue presente y teniéndola presente.

– generar rumores sobre la víctima

La sutileza de estas conductas hace que en sí mismas no sean delito, además, hacen quedar a la víctima como una "paranoica". Por otra parte, quien maltrata se victimiza alegando que no hay nada de malo en enviar un mensaje o un regalo y que es la otra persona quien saca las cosas de quicio y la ataca, o quien ve cosas donde no las hay, quien interpreta que todo lo que hace la maltratadora va dirigido a ella, etc. (no hay que perder de vista que los mensajes cifrados están hechos de tal forma que sólo la víctima y personas muy conocedoras de cómo ha sido la relación pueden entender, de ahí la perversidad de los mismos). En otras palabras, la sociedad y el entorno de la víctima minimizan y normalizan el acecho, lo que genera aún más indefensión y vulnerabilidad en la víctima. Sin embargo, estas conductas aparentemente inocentes, e incluso algunas percibidas como atentas o detallistas, hay que enmarcarlas e interpretarlas desde la violencia sufrida, por tanto, sus consecuencias son la intimidación, la coacción, el miedo, inseguridad, estrés postraumático... En definitiva, el contexto es crucial a la hora de identificar el stalking, no podemos valorarlo a través de conductas aisladas, hay que ver de dónde provienen esas conductas, qué pretenden y que están consiguiendo. Donde personas ajenas a los términos en que se ha producido una relación y la ruptura, desconocedoras de la violencia y de lo que ésta implica, ven un inocente "me gusta" en una publicación en una red social, la víctima, que ha pedido a quien la maltrataba en reiteradas ocasiones no tener nada que ver con ella, lo que ve es que la maltratadora, muchos meses después de la ruptura, usa un perfil gestionado por ella y distinto a su perfil personal para hacerse visible; es decir, para la víctima es un mensaje alto y claro: "sigo aquí y sigo pendiente de ti". Desde la normalización social del acecho y desde la incompreensión acerca de lo que éste implica, las personas cercanas le darán la razón a la maltratadora porque verán que las quejas de la víctima, el que la haya borrado de la red social, etc. son acciones totalmente injustificadas y suponen un ataque y un desprecio hacia la maltratadora.

La necesidad de la reforma operada en nuestro Código Penal se pone en evidencia por las variadas resoluciones que, en el enjuiciamiento de hechos ocurridos antes del 1 de julio de 2015, argumentan que la prueba más clara de que las conductas constitutivas de stalking venían escapando del reproche y castigo jurídico es precisamente la introducción del nuevo delito en la reforma llevada a cabo a través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.





**UNDÉCIMO.-** Las consideraciones precedentes permiten una aproximación al nuevo tipo penal y a los requisitos que su consumación requiere y partiendo como ya se ha señalado su incardinación en los delitos contra libertad regula el precepto dos tipos delictivos el básico y el agravado definidos en el artículo 172 ter del Código Penal que previene:

*1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:*

*1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física.*

*2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.*

*3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.*

*4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella."*

El bien jurídico protegido por la norma claro es lo constituye la libertad de obrar de la víctima, entendida como la capacidad de decidir libremente. Las conductas constitutivas de stalking afectan al proceso de formación de la voluntad de la víctima provocando en esta una sensación de temor e intranquilidad y angustia motivada por el reiterado acoso que constituye la conducta del sujeto activo del tipo, acoso que en aras a librarse de él provoca que la víctima proceda a modificar sus hábitos, sus horarios, sus costumbres lugares de paso, sus números de teléfono, cuentas de correo electrónico e incluso de lugar de residencia y trabajo.

En segundo término y como expresa el preámbulo de la L.O., se protege asimismo el bien jurídico de la seguridad. Esto es, el derecho al sosiego y a la tranquilidad personal. Ahora bien y en contra de lo que pudiera pensarse de inicio solo conformaran los requisitos del tipo y por ende únicamente tendrán relevancia penal aquellas conductas que limiten la libertad de obrar de la víctima alterando como señala la norma la vida cotidiana del sujeto pasivo y sin que el simple temor o la mera molestia sea punible, pues se requiere la afectación de la vida y costumbres habituales de la víctima para la conformación del tipo tal y como el propio texto previene en su redacción al establecer cuáles son las formas en que el acoso puede materializarse.



Respecto al tipo agravado el precepto lo regula cuando las conductas de acosos u hostigamiento se producen dentro el ámbito familiar haciendo especial remisión a la previsión normativa del artículo 173 del Código Penal.

Otra cuestión que ha de requerir de análisis es la relativa al número de acciones que han de materializarse para la consumación del tipo y a este respecto debe señalarse que el precepto no hace referencia a ello siendo la única realizada la de *el que de forma insistente y reiterada*, lo que claramente excluye del tipo los actos asilados e individualizados y por el contrario hace una expresa referencia a un patrón de conducta del sujeto activo, configurado con la reiteración de un acto concreto o la materialización como será lo usual de distintos actos de los previstos en el tipo con el fin tendente a conseguir lo que la víctima se niega, la relación con el acosador.

Dentro de las conductas que la norma establece como constitutivas de Stalking se señalan:

1. Vigilar, perseguir o buscar su cercanía física: Se incluyen de esta forma conductas tanto de proximidad física como de observación a distancia y a través de dispositivos electrónicos como GPS y cámaras de video vigilancia.

2. Establecer o intentar establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas: Se incluye pues, tanto la tentativa de contacto como el propio contacto.

3. El uso indebido de sus datos personales para la adquisición de productos o mercancías, el contrato de servicios o hacer que terceras personas se pongan en contacto con ella: entrarían en este supuesto los casos habituales de acosos en que el sujeto activo publica anuncios en Internet o comentarios a través de las redes sociales en las que las que aparentemente la víctima ofrece algún servicio que provoca que la víctima reciba múltiples llamadas.

4. Atentar contra su libertad o el patrimonio o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella: No se especifica qué clase de atentado contra la libertad o patrimonio. En la conducta que el regula el número no se especifica si se trata de las conductas ya tipificadas como tales en el Código Penal, o si dentro de la citadas conductas se incluyen también conductas no tipificadas como delito.

En último término y como requisitos de procedibilidad el precepto penal en su apartado cuarto establece la necesidad de denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, requisito que se exceptiona para el tipo agravado cuando el acoso se materializa dentro de la esfera familiar y el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 CP. .



**DUODÉCIMO.-** Trasladando todo lo precedentemente expuesto al supuesto objeto de enjuiciamiento, claro es que en el presente concurren los requisitos que le tipo requiere para su consumación, pues como se ha puesto de relieve en la resultancia fáctica de la presente resolución claro es que no nos encontramos ante un conducta que pueda definirse como acto o hecho aislado, sino que es reiterado y reiterativo, hecho este que además es reconocido por el encausado. En segundo término que constituye un patrón de conducta encaminado, conforme reconoce el propio acusado, a conseguir la entrevista y reunión con la víctima bajo la excusa de que se le den explicaciones, o se le manifiesten las razones de la ruptura de la amistad, con el claro fin también reconocido de revertir la decisión de la víctima conculcando su intimidad su paz y sosiego y con el fin implícitamente reconocido de atentar contra la libertad de la víctima y conseguir mediante el citado patrón de conducta revertir la decisión, patrón de conducta, en nada novedoso en el acusado pues es el mismo que utilizo con anterioridad para intentar alterar la primitiva decisión de la víctima de no avanzar cual era la pretensión del encausado, de su relación de amistad a otra de carácter amoroso, por lo que habiendo materializado las conductas que el tipo previene es patente que ha de concluirse en la materialización del tipo penal de que viene acusado y en su consecuencia habrá de responder de este en concepto de autor.

**DECIMOTERCERO.-** Conforme a las previsiones del art. 66.1 del C.P. en relación con la determinación con la pena cuando concorra una circunstancia atenuante se aplicara la pena en su mitad inferior de donde ha de concluirse de un análisis del mentado precepto que en los casos de inexistencia de atenuante la pena se impondrá en la mentada mitad inferior por debajo de su grado medio, previendo los supuestos del concurso de atenuantes de ahí que dé común se sostenga que la pena a imponer en los supuestos denominados neutros (inexistencia de atenuantes o agravantes) será el grado medio de la mitad inferior pues en otro caso se equipararían los supuestos de una atenuante con los mentados supuestos neutros quebrándose el principio de Igualdad de todos los españoles ante la ley y en la aplicación de la ley al hacerse de igual condición al ciudadano sometido a un procedimiento en quien concorra una atenuante y aquel otro en el que su conducta con concorra ninguna razón la citada que ampara la mentada aplicación en base a principios constitucionales de obligado cumplimiento.

No ignora este Juzgador que la mentada posición doctrinal no es unánimemente compartida más tampoco compartir una posición de determinación de la pena carente de criterios en su fijación y conculcadoras del principio de igualdad de todos los españoles ante la ley y en la aplicación de la ley pues ello sería contrario a una doctrina jurisprudencial reiterada



contenida entre otras en la (STS 722/2003 de 12 de mayo RJ 2003\3982) que el artículo 14 de la Constitución establece que todos los españoles son iguales ante la ley y en la aplicación de la ley y que sólo la diferencia arbitraria, ilógica o carente de sentido respecto al tratamiento jurídico-penal de los sujetos a un proceso penal en cualquiera de sus expresiones, incluido el ámbito penológico puede determinar una violación del artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. En ese sentido se ha manifestado igualmente el Tribunal Constitucional, que en la STC 200/1990 (RTC 1990, 200) expresa que *«el principio de igualdad protege frente a divergencias arbitrarias de trato en resoluciones judiciales, evitando el capricho, el favoritismo o la arbitrariedad del órgano judicial, e impidiendo que no se trate a los justiciables por igual y se discrimine entre ellos»*. El mismo Tribunal en las sentencias 23/81 (RTC 1981, 23) y 19/82 (RTC 1982, 19) declara que no se excluye la posibilidad de un trato diferente, pero sí las diferencias injustificadas o arbitrarias, carentes de justificación objetiva y razonable. El principio de igualdad ordena tratar de distinto modo a lo que es diferente (STC 50/91 [RTC 1991, 50]).

Consiguientemente con el contenido de la citada doctrina de imperativa aplicación por este Juzgador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la LOPJ que impone a los Jueces y Tribunales la aplicación de las normas conforme a la interpretación efectuada por el Tribunal Constitucional y potenciando los derechos recogidos en la carta magna, lo que evidencia en base a la doctrina expuesta que sin la discriminación se materializa en una interpretación de la norma en contra del principio de igualdad ya que no se puede dar un trato paritario e igual a lo desigual la doctrina reseñada únicamente pretende dar cumplimiento a la mentada interpretación y aplicar el mentado derecho y diferencia los supuestos en que el ciudadano en un hecho delictivo y con base las atenuantes definidas y configuradas por el legislador entiende concurre en un supuesto determinado de los restantes o mejor dicho de aquellos en los que no existen atenuantes o agravantes de tipo alguno y de ahí que se reserve trayendo a colación las normas penológicas contenidas en el precedente código de 1973 la del grado mínimo de la mitad inferior para los supuestos de hechos delictivos en los que concorra una atenuante reservando los grados medio y superiores para los restantes y de tal forma y con base en esos parámetros distinguir entre libre arbitrio judicial para la determinación de la pena dentro de los mentados parámetros y la arbitrariedad y por ende quiebra del principio de igualdad cuando se aplica el grado mínimo a supuestos en los que no concorra atenuante alguna y todo ello con el límite a contenido en el artículo 789.3 de la LECr, y en directa aplicación del principio acusatorio.

En el presente caso es evidente que la única pena que podrá imponerse es la demandada por el Ministerio Fiscal pues por aplicación de la doctrina citada o por aplicación de lo dispuesto en el artículo 789.3 de la LECr. Así mismo y a pesar de las previsiones del tipo que permite la opción



entre la pena privativa de libertad y la pecuniaria habiendo optado las acusaciones por esta última en esta habrá de ser concretada y en su consecuencia habrá de concretarse en OCHO MESES DE MULTA.

**DECIMOCUARTO.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del Código Penal para la determinación de la pena de multa, se establece como cuota, la cantidad de CINCO EUROS, y ello atendiendo a las circunstancias personales y cargas familiares del condenado, puestas de manifiesto en el acto del juicio, y las obligaciones económicas por este asumidas, fijándose como módulo comparativo para su cuantificación el del salario mínimo interprofesional para personas mayores de dieciocho años. Atendiendo a las circunstancias personales y económicas del condenado su pago se llevara a término de una sola vez, al no aparecer circunstancias objetivas que justifiquen su fraccionamiento.

**DECIMOQUINTO.-** En cuanto a la responsabilidad civil, y acreditada la producción de un daño es evidente que resulta procedente su reparación de conformidad con lo dispuesto en los arts. 108 y 109 del código penal, todo responsable de un delito lo es así mismo de las consecuencias del mismo derivadas, razón por la cual el acusado habrá de indemnizar a la perjudicada por el daño moral a la misma causado como consecuencia de la materialización de los ilícitos a virtud de los cuales se le condena en la cantidad de DOS MIL EUROS, por ser patente el daño moral causado como consecuencia de la inquietud el temor y el acoso sufridos, debiendo a este respecto precisarse y ello saliendo al paso de las alegaciones de la defensa que la única reclamación efectuada lo es por el daño moral sufrido y no el daño patrimonial o personal padecidos que no han sido objeto de reclamación y que por tanto no pueden ser objeto de pronunciamiento pues la responsabilidad civil requiere de rogación y contradicción no pudiendo efectuarse pronunciamientos de oficio.

**DECIMOSEXTO.-** Resta en último termino por efectuar unas consideraciones respeto de la posibilidad o no de que este Juzgador se pronuncia sobre la pertinencia de la imposición de alguna de las penas accesorias previstas en el artículo 57 del Código Penal. A este respecto importa destacar que el citado artículo 57 en su número 1 establece que los Jueces en los delitos entre otros contra la libertad atendiendo a la gravedad de los hechos y al peligro que el delincuente represente *podrán acordar* en sus sentencias la imposición de una o varias de las prohibiciones contenidas en el artículo 48 por un tiempo que no excederá de 10 años en las penas graves y de 5 en si al pena fuera menos grave.

La citada previsión normativa y dada al configuración de la penas a



que hace referencia el precepto y su configuración de accesoria es evidente que no ha de requerir de rogación específica sino que su imposición es de carácter imperativo para todos los tipos penales que el apartado 1 del artículo 57 recoge debiendo únicamente la sentencia determinar la extensión de la pena y ello conforme a las reglas que se consignan en el párrafo primero del número citado y del párrafo segundo, lo que motiva en el presente caso que además de las penas que ya se han señalado en fundamento precedentes y justificada su imposición además y de conformidad con la precedente previsión normativa y a pesar de la ausencia de rogación se imponga además al condenado la Prohibición de aproximación a las víctimas a una distancia no inferior a 200 metros de sus persona, domicilio propio o de sus padres, por un plazo temporal de cinco años de acuerdo con la previsión contenida en el párrafo segundo del artículo 57.1 del Código Penal, así como la prohibición de comunicación con las víctimas por cualquier medio o procedimiento durante idéntico plazo.

**DECIMOSÉPTIMO.-** Conforme al artículo 123 del Código Penal, las costas se entienden impuestas por la Ley a todo responsable criminal de un delito.

Vistos los preceptos citados y demás disposiciones normativas de aplicación.

## FALLO

En méritos de lo expuesto, en nombre de **S.M. EL REY**, y por la autoridad conferida por el Pueblo Español y,

**DEBO CONDENAR Y CONDENO** a ..... Como autor penalmente responsable de un delito de **ACOSO** previsto y penado en el artículo 172. Ter 1. 1ª y 2ª del Código Penal sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de **OCHO MESES DE MULTA** a razón de una cuota diaria de CINCO EUROS con arresto legal sustitutorio en caso de impago n la accesoria de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y ello con expresa imposición de las costas causadas en el presente procedimiento.



Por vía de responsabilidad civil el condenado indemnizara a:

\* en la cantidad de 2.000.- DOS MIL EUROS por los daños morales causados.

**DEBO ACORDAR Y ACUERDO LA PROHIBICIÓN DE APROXIMACIÓN** del condenado a la Víctima ( ) a una distancia inferior de 200.- Metros de su persona y domicilio así como el de sus padres durante el termino de CINCO AÑOS e imponen al condenado las costas del procedimiento. Así como **PROHIBICIÓN DE COMUNICACIÓN** por cualquier medio o procedimiento por idéntico plazo.

**ABÓNESE** al condenado el tiempo que ha estado privado de derechos por esta causa

Notifíquese la presente resolución a las partes previniéndoles que la misma no es firme pudiendo interponer contra la misma **RECURSO DE APELACIÓN** en el término de DIEZ DÍAS desde la fecha de su notificación.

Así por esta mi Sentencia definitivamente juzgado en esta instancia de la que se expedirá Testimonio para su unión a los autos, la pronuncio mando y firmo.

**PUBLICACIÓN.-** La anterior Sentencia ha sido dada, leída y publicada por el Ilmo. Sr. MAGISTRADO que la suscribe, hallándose celebrando audiencia publica en el día de su fecha. Doy fe.